



## **SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL**

### **AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO**

**Medellín, veintiséis de mayo de dos mil veintitrés**

#### **22-197**

Proceso: ORDINARIO LABORAL- apelación.  
Demandante: **ADRIANA CORDOBA SANCHEZ.**  
Demandado: **COLPENSIONES E.I.C.E. y PORVENIR S.A.**  
Radicado No.: 05001-31-05-011-2020-00116-01.  
Tema: ineficacia traslado  
Decisión: **MODIFICA SENTENCIA.**

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, conformada por los Magistrados **MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA, MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO** y como ponente **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por PORVENIR S.A y COLPENSIONES E.I.C.E contra la sentencia de primera instancia emitida en el proceso de la referencia.

Conforme memorial de celeridad allegado, se reconoce personería jurídica a la doctora ANA MARIA PINEDA JARAMILLO identificada con C.C. No. 1.128.396.836 y portadora de la T.P. No. 226.051 del C.S de la J. para representar los intereses de COLPENSIONES conforme sustitución de poder que le hiciera el apoderado principal RICHARD GIOVANNY SUAREZ TORRES, identificado con c.c. 79.576.294 y TP. 103.505 del C.S. de la J. representante legal de la firma RST ASOCIADOS PROJECTS S.A.S., con plenas facultades de acuerdo con las previsiones de los artículos 74 y 75 del CGP debidamente inscrito ante la Cámara de Comercio de Bogotá según consta en el Certificado de Existencia Representación Legal que acompañó, en su calidad de apoderado y de conformidad con la Escritura Publica No. 3.377 del 2 de septiembre de 2019, suscrita en la notaria 9 del circulo de Bogotá.

El Magistrado de conocimiento, doctor **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, sometió a consideración de los restantes integrantes el proyecto aprobado en Sala virtual mediante **ACTA 016** de discusión, que se adopta como sentencia, en los siguientes términos:

#### **1. SÍNTESIS FÁCTICA y ANTECEDENTES**

##### **1.1. LO PRETENDIDO**

Solicitó la demandante, la declaratoria de **INEFICACIA y/o NULIDAD** del traslado a PORVENIR S.A, que se ordene a esta administradora del RAIS a devolver a COLPENSIONES E.I.C.E. todas las cotizaciones y rendimientos financieros que reposan en la cuenta de ahorro individual de la demandante, así mismo solicita se ordene el retorno de la demandante al RPM.

### **1.2. PARA FUNDAMENTAR SUS PRETENSIONES, EXPUSO LOS SIGUIENTES HECHOS:**

- ✓ Que nació el 11 de septiembre de 1962, por lo que a la fecha de presentación de la demanda contaba con 56 años de edad.
- ✓ Que cuenta con un total de 1,474 semanas de cotización.
- ✓ Que a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, contaba con más de 200 semanas de cotización al sistema de seguridad social en pensiones.
- ✓ Que en agosto de 1994, se trasladó al RAIS administrado por Porvenir S.A, con ocasión a las directrices impartidas por la Fundación Santa Fe, última que autorizó el ingreso de una asesora comercial de la AFP accionada, con el fin de realizar el traslado de régimen.
- ✓ Que la asesora comercial no brindó ningún tipo de asesoría profesional, limitándose únicamente a tomar los datos y rubricas para efectuar el traslado al RAIS.
- ✓ Que no recibió asesoría antes de cumplir 47 años de edad.
- ✓ Que el 17 de febrero de 2020 solicitó a Colpensiones E.I.C.E la aceptación del traslado de régimen.

### **1.3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA**

Controvirtió Colpensiones E.I.C.E el derecho pretendido, quien aceptó como ciertos los hechos relativos a la fecha de nacimiento y edad de la demandante, así como la afiliación inicial al ISS, respecto de los demás supuestos fácticos, resalta no constarle, considerando que son hechos ajenos al conocimiento de dicha entidad.

Por su parte Porvenir S.A, vencido el término legal no aportó contestación a la demanda, conforme lo indicó el a quo mediante Auto fechado a 9 de junio de 2022 (fls. 1 y 2 del archivo 008 del expediente digital).

### **1.4. DECISIÓN PRIMERA INSTANCIA**

Mediante sentencia proferida el 12 de agosto de 2022, el Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín declaró la ineficacia de la afiliación al RAIS. Ordenó a PORVENIR S.A, trasladar a Colpensiones, los aportes de la demandante como son cotizaciones, gastos de administración, con todos sus frutos e intereses, las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes, con los rendimientos que se hubieren causado y el porcentaje correspondiente a la garantía de pensión mínima, también deberá trasladar la prima de reaseguro de FOGAFIN y los aportes al fondo de solidaridad pensional que se hubieren causando en el tiempo en que la actora estuvo afiliada a dicha administradora, valores que deben estar debidamente indexados sin aplicar equivalencia alguna, aunado a esto aclaró que al momento de cumplir la orden, los conceptos deberán aparecer discriminados por la AFP con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, ingreso base de cotización, aportes y demás información importante que los justifique.

En cuanto a COLPENSIONES E.I.C.E., le ordenó reactivar la afiliación del demandante en el RPM sin solución de continuidad y, recibir los valores trasladados por la AFP demandada

Finalmente condenó en costas a PORVENIR S.A. y a COLPENSIONES E.I.C.E, fijando como agencias en derecho la suma de \$1.000.000 y \$500.000, respectivamente, y a favor de la demandante.

Dentro del término concedido por la ley, tanto PORVENIR S.A, como COLPENSIONES E.I.C.E. interpusieron y sustentaron recurso de apelación.

## **2. ARGUMENTOS DEL JUEZ PARA DECIDIR**

La decisión se motivó en el incumplimiento del deber de información por parte de la administradora del RAIS, en quién recaía la carga de acreditar la existencia de una asesoría clara, completa y veraz, lo que no ocurrió, sujetándose para el efecto en las sub-reglas sentadas en la línea jurisprudencial de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

### **2.1. RECURSOS DE APELACIÓN.**

#### **2.2.1 RECURSO DE APELACIÓN PORVENIR S.A.**

En primer lugar indicó que no es dable declarar la ineficacia de la afiliación, por cuanto el artículo 271 de la Ley 100 del 1993, de manera expresa, prevé que para que se dé su declaratoria, deben existir actos que impidan o atenten en contra de la afiliación del trabajador, es decir, sin duda cuando se realizan actos con dolo para impedir o atentar en contra de esa libertad de afiliación, lo que supone la

intención de causar daño, situación que no se acreditó, por el contrario con claridad se suscribe el formulario de afiliación de manera libre y voluntaria. Resaltó que para los años en que se realiza el traslado de régimen, el deber de información se había estipulado por la Ley 100 de 1993, en la cual el legislador únicamente consideró como prueba documental el formulario de afiliación.

De otro lado resaltó que la AFP no fue quien motivó la afiliación, por el contrario fue el empleador, de manera que no se puede imponer una carga respecto de la cual no tiene injerencia, máxime cuando ya la Ley 100 de 1993 ha establecido en el artículo 271 que el empleador deberá ser sancionado por imponer la selección, situación que nunca ha llamado la atención en estos casos, donde el empleador es quien impone la selección o afiliación del organismo del sistema de seguridad social, sin perjuicio de lo anterior, adujo que no era deseo de la demandante el trasladarse de régimen por cuanto se encontraba en la plena libertad de hacerlo dentro de los plazos establecidos por la Ley, sin que su omisión se puede atribuir alguna clase de responsabilidad a la AFP, y en ese sentido, la demandante fue quien no ejerció de manera oportuna los derechos que la ley le otorga sin que pueda alegar su propia negligencia en su beneficio.

Aunado a lo anterior, argumentó que de manera libre durante el tiempo de vinculación, aproximadamente por un espacio de 20 años, se realizaron descuentos con destino a la AFP, conducta que bajo la línea que de la honorable Corte Suprema de Justicia, se debe considerar como la verificación de la voluntad del afiliado, tal y como se indicó mediante Sentencia 47.236 del 6 de abril de 2016. De otro lado consideró que al tenor del artículo 9 del Código Civil, la ignorancia de la ley no sirve excusa, señalando que la demandante debía conocer la información que le permitió tomar la decisión de trasladarse de régimen pensional, sin que pueda aducir que la AFP abuso de una posición dominante y sin importar si es un afiliado lego porque aun cuando hubieran sido abogados y conocedores del Derecho, indicarían lo mismo.

Respecto a la condena por gastos de administración, soslayó que la Superintendencia Financiera de Colombia ha indicado taxativamente que en el evento que proceda la declaratoria de nulidad o ineficacia del traslado, las sumas a retornar serán los aportes y los rendimientos de la cuenta de ahorro individual, es decir, lo que estipuló el legislador en el artículo 113, literal B de la Ley 100 de 1993, mas no los gastos de administración, pues dicho tema no está estipulado en la Ley porque claramente los gastos de administración no corresponden a valores que pertenezcan al afiliado en ningún régimen pensional, ya que no van a entrar a financiar la prestación de vejez y por ende no es parte íntegra de ella, y en caso de decidir retornar las cosas a su estado natural, el estado natural no incluye gastos de administración, pues en el régimen de prima media es bien sabido que no se generan esos rendimientos, esto aunado a que dichas condenas tienen más una apariencia de un pago de perjuicios

a cargo de la AFP, pues si se habla de perjuicios, no se puede desconocer que estaría a cargo de los demandantes haber probado su existencia, situación que no acaeció.

Con relación a la indexación de la sumas a retornar, manifestó que de proceder se estaría generando una doble condena por el mismo concepto y conforme a la sentencia emitida dentro del proceso 52-221-112, por el Tribunal de Cundinamarca, se considera que le asiste razón a la AFP, por cuanto se está ordenando la devolución de los rendimientos financieros, rubro que incluye los frutos e intereses que se obtuvieron con los dineros recibidos, de manera que dicha figura ya se está incluyendo, por lo que solicitarlo de manera indexada generaría una doble condena por el mismo concepto y esto tiene más la apariencia de un pago de perjuicios a los cuales pues no hay lugar. Con relación a los seguros previsionales, estos fueron entregados a terceros de buena fe que no fueron llamados en garantía y por tanto, sería injusto desde el punto de vista de la equivalencia de los contratos pues teniendo en cuenta que Porvenir S.A mediante una aseguradora, cubrió durante todo ese tiempo los riesgos de invalidez, vejez y muerte, y no se pueden retrotraer coberturas que ya se prestaron, por lo que ordenar a devolver estos valores del propio peculio sería generar un detrimento injustificado a cargo de Porvenir S.A.

De este modo solicita se revoque la sentencia proferida por el a quo y se absuelva a porvenir de las pretensiones incoadas en su contra.

### **2.2.2 RECURSO DE APELACIÓN COLPENSIONES E.I.C.E.**

Solicita que en el evento en que se considere la confirmación de la providencia, se modifique la misma bajo el entendido de que con base en los Decretos 663 de 1993 y 692 y 720 de 1994, los fondos privados tenían la obligación de ejecutar en debida forma el deber de información y al quebrantarse dichas obligaciones, es la AFP quien debe asumir los efectos de la ineficacia del traslado, es decir el eventual reconocimiento de prestaciones económicas bajo los parámetros que caracterizan al RPM, o en su lugar, recalcular los valores a transferir de tal forma que se cubra en su totalidad las erogaciones económicas que Colpensiones E.I.C.E tenga que asumir, lo anterior con el fin de no transgredir el principio de Sostenibilidad Financiera dispuesto por el Acto Legislativo 01 de 2005 y atendiendo a que Colpensiones no tiene la obligación de soportar cargas que fueron creadas por el incumplimiento de obligaciones de un tercero.

Respecto a las costas procesales, aduce el recurrente que no se debe aplicar objetivamente el artículo 365 del C.G.P, bajo el entendido que la entidad es un sujeto exógeno y no ocasiona la Litis, además de que el numeral octavo ibídem, faculta al juez para decidir sobre la procedencia de dicha condena.

## **2.3 ALEGATOS.**

### **2.3.1 ALEGATOS PRESENTADOS POR LA PARTE DEMANDANTE.**

Después de realizar un recuento jurisprudencial y normativo acerca de los presupuestos que regulan la ineficacia del traslado de régimen pensional, tales como la carga de la prueba y el cumplimiento del deber de información por parte de las AFP, consideró que Porvenir S.A, no probó el suministro de información al momento del traslado de régimen y tampoco antes de que la demandante cumpliera 47 años de edad, del mismo modo resaltó que según el interrogatorio de parte evacuado, la señora fue engañada por los asesores de la AFP, quien utilizó mentiras y engaños para obtener el traslado de régimen pensional .

### **2.3.2 ALEGATOS PRESENTADOS POR COLPENSIONES E.I.C.E.**

Por su parte, Colpensiones E.I.C.E se ratificó en los argumentos plasmados en el recurso de alzada bajo el entendido que se debe trasladar la responsabilidad del incumplimiento a la AFP accionada, ordenándole el reconocimiento de prestaciones económicas bajo los parámetros del RPM, en igual sentido solicitó se revoque la condena en costas por considerar que la entidad es un sujeto exógeno al litigio.

### **2.3.3 ALEGATOS PRESENTADOS POR PORVENIR S.A**

Porvenir S.A, solicitó la revocatoria integral del fallo proferido por el a quo, bajo el entendido de que conforme al artículo 1508 y 1741 del Código Civil, no se probaron los elementos para declarar la nulidad del acto de traslado. Aunado respecto a la ineficacia de la afiliación indicó que al tenor del artículo 271 de la Ley 100 de 1993, tampoco resultaron probados los presupuestos en tanto el formulario de afiliación suscrito, es un documento público y auténtico según los artículos 243 y 244 del C.G.P y el párrafo del artículo 54A del C.P.T y S.S, y que además contiene la declaración de que trata el artículo 114 de la Ley 100 de 1993, esto es que la selección fue libre, espontánea y sin presiones, sumado a que el referido documento no fue tachado, ni desconocido como lo disponen los artículos 246 y 272 respectivamente del C.G.P.

Resaltó que la parte demandante realizó cambio de régimen de forma libre y voluntaria, en el cual se le brindó una información oportuna y completa, como lo aseveró al suscribir el formulario de afiliación, aunado a que durante el tiempo de vinculación, la parte actora permitió el descuento del aporte con destino al fondo privado que represento, conductas que bajo la línea que ha trazado la H. Corte

Suprema de Justicia, Sala Laboral, deben considerarse como “la verificación de la voluntad del afiliado”, esto al tenor de la Sentencia de la C.S.J con radicado 47.236 del 06 de abril de 2016. Aunado a lo anterior, a su juicio considera que jurídicamente no es viable imponerle cargas distintas a mi representada, a las previstas en las leyes existentes al momento en que sucedió la afiliación de la parte demandante, pues constituye una violación al debido proceso y a la confianza legítima del fondo privado, ya que para cuando se celebró el acto jurídico de vinculación, no solo el afiliado para ese momento era jurídicamente capaz, sino que además, el citado acto contiene objeto y causa lícita, y ahora por cuenta de interpretaciones y el alcance que se hace de algunas normas, se desconocen instituciones primarias de un estado social de Derecho como son la validez y los efectos de los actos jurídicos.

Ahora bien, de forma subsidiaria soslayó que el artículo 113, literal b) de la Ley 100 de 1993, menciona cuáles son los dineros que se deben trasladar cuando existe el cambio de régimen, esto es “el saldo de la cuenta individual, incluidos los rendimientos (...)”, lo que impide que legalmente se pueda ordenar la devolución de sumas diferentes a las referidas en esta norma, esto por cuanto ningún otro valor está destinado a financiar la prestación del afiliado, por lo que condenar a pagar valores adicionales, configura un enriquecimiento sin causa a favor de un tercero dentro del negocio jurídico. Respecto de los gastos de administración resaltó que la Superintendencia Financiera de Colombia, en concepto con radicación No. 20191522169-003-000 del 17 de enero de 2020, indicó en forma expresa que en los eventos de proceder la nulidad o ineficacia del traslado, las únicas sumas a retornar son: los aportes y rendimientos de la cuenta individual del afiliado, sin que proceda la devolución de la Prima de Seguro Provisional en consideración a que la compañía aseguradora cumplió con el deber contractual de mantener la cobertura durante la vigencia de la póliza, ni tampoco la comisión de administración, es por esto que al no corresponder a valores que pertenecen a los afiliados en ninguno de los regímenes pensionales en cuanto no financian la prestación de vejez y por ende no son parte integrante de ella, son susceptibles al fenómeno jurídico de la prescripción previsto en los artículos 488 del C.S.T y 151 del C.P.T y S.S.

Respecto a la indexación de las condenas, considera que al tenor de la sentencia de la Corte Constitucional C- 00161 de fecha 13 de mayo del 2010, la sentencia SL 9316 de fecha 29 de junio de 2016 de la Corte Suprema de Justicia, sentencia de fecha 21 de junio de 2022 con Radicación No. 25899-31-05- 002-2021-00111-01 del Tribunal Superior de Cundinamarca y sentencia con radicación No. 76001-31-05- 012-2022-00234-01 del Tribunal Superior de Cali - Sala Laboral, la misma es improcedente por cuanto los recursos de la cuenta de ahorro individual de la parte demandante no se vieron afectados por la devaluación o inflación de la economía y por contrario, Porvenir S.A., con su administración le garantizó rendimiento a los mínimos establecidos en la ley para el RAIS y muy superiores a los que le hubiera generado el RPM.

Finalmente solicitó se analice las circunstancias particulares del caso de autos, que exhiben con suficiencia que en el acto jurídico celebrado entre las partes no se probó ninguno de los presupuestos establecidos en la ley para declarar la nulidad absoluta, como tampoco, la ineficacia del acto jurídico por el argumento jurisprudencial de la falta del consentimiento informado, como quiera que mi representada cumplió con la carga probatoria de acreditar que suministró la información suficiente y objetiva al momento de la vinculación como lo refleja el formulario de afiliación, el cual se reitera se trata de un documento público que se presume auténtico, además que no fue tachado ni desconocido en los términos previstos en la ley.

### **3 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO EN ESTA INSTANCIA**

De acuerdo con lo planteado en el recurso de alzada, se establecerá si es dable declarar la ineficacia de la afiliación de la demandante a la sociedad administradora de fondo de pensiones Porvenir S.A, a través de la cual se trasladó al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, analizando lo atinente a la aplicabilidad de lo que en torno al tema ha dispuesto la Corte Suprema de Justicia. En caso afirmativo se determinará qué haberes le corresponde retornar a dicha AFP

Así mismo, conforme a lo señalado por nuestro órgano de cierre, se examinará en grado jurisdiccional de consulta aquellos aspectos que pese a ser adversos Colpensiones, no fueron objeto del recurso de apelación, al ser el Estado garante dicha entidad conforme lo normado en el art. 69 del CPT y la SS, disposición en virtud de la cual se faculta a este órgano a adicionar, aclarar y/o modificar la providencia en los ítems que resulten necesarios.

### **4 CONSIDERACIONES.**

A juicio de esta Magistratura, el corpus argumentativo que ha construido la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia para este asunto de la ineficacia de los traslados, se ha ido ampliando con el paso de los años. Es así como en la sentencia con radicado 31.989 de 2008, reiterada en las sentencias de radicación 31.314 del 09 de septiembre de 2008 y 33.083 del 22 de noviembre de 2011, la Corte abordó el estudio del asunto bajo el enfoque de la nulidad del acto, acontecida como consecuencia de un vicio en el consentimiento al suscribir los formularios de afiliación con los cuales se materializaba su traslado al RAIS, señalando que dicho consentimiento se afectó determinadamente por el engaño al que fueron sometidos por parte de los asesores de los Fondos de Pensiones demandados y que los llevó a tomar una decisión que iba contra sus intereses.



Posición que mudó posteriormente, para adscribirse a lo que ha denominado la ineficacia, cuando adujo que *solo a través de la demostración de la existencia de la libertad informada para el cambio de régimen, es que el juzgador podría avalar su transición; no se trata de demostrar razones para verificar sobre la anulación por distintas causas fácticas, sino de **determinar si hubo eficacia en el traslado***. (Sentencia con radicado 46.292 de 2014).

Desde un comienzo, la tesis de la ineficacia se ha apoyado en dos disposiciones normativas contenidas en la Ley 100 de 1993: el literal b) del artículo 13, que señala el carácter libre y voluntario de la elección del respectivo régimen y las posibles sanciones para quien atente contra ese derecho; y el artículo 271, donde se establecen las respectivas sanciones para quienes coarten esa libre selección al afiliarse y se indica que la misma quedará sin efecto.

Al desecharse la vía de la nulidad, ya NO es preciso acudir a lo normado en el art. 1750 del Código Civil, que contempla el plazo de cuatro años para interponer la acción de rescisión por nulidad relativa, ni tampoco resultó posible que con la re-asesoría que los Fondos privados brindaban en muchas ocasiones, se pudiera convalidar ese traslado original.

Por las consecuencias que la Sala Laboral ha derivado de la ineficacia de los traslados al RAIS, resulta claro que ha optado por la ineficacia por inexistencia del acto jurídico, en este caso, por la ausencia total de consentimiento al momento de la afiliación o del traslado, siendo ese consentimiento un elemento de la esencia del negocio.

Punto en que la jurisprudencia del trabajo se ha explayado en razones para explicar cómo en los casos donde ha prosperado la declaratoria de la ineficacia, se ha estado en ausencia de un **consentimiento informado**, entendido como *un procedimiento que garantiza, antes que aceptar un ofrecimiento o un servicio, la comprensión por el usuario de las condiciones, riesgos y consecuencias de su afiliación al régimen. Vale decir, que el afiliado antes de dar su consentimiento, ha recibido información clara, cierta, comprensible y oportuna*. (Sentencia con radicado 68838 de mayo de 2019). Lo cual en ningún caso puede subsanarse con la firma en señal de aceptación en un formato previamente determinado por la AFP.

Ese deber de información ha estado presente desde la creación del Sistema de Seguridad Social Integral en Colombia. E incluso desde antes. En efecto, el Decreto 663 de 1993, «Estatuto Orgánico del Sistema Financiero», aplicable a las AFP desde su creación, prescribió en el numeral 1° del artículo 97, la obligación de las entidades de «suministrar a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte

que les permita, a través de elementos de juicio claros y objetivos, escoger las mejores opciones del mercado».

La propia corte, en la sentencia 68.838, multireferenciada, elabora un cuadro que intenta mostrar la evolución normativa en la materia. Así:

Etapa acumulativa	Normas que obligan a las administradoras de pensiones a dar información	Contenido mínimo y alcance del deber de información
Deber de información  <b>ETAPA EN LA QUE SE ENCONTRABA LA DEMANDANTE</b>	Arts. 13 literal b), 271 y 272 de la Ley 100 de 1993 Art. 97, numeral 1.º del Decreto 663 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 797 de 2003 Disposiciones constitucionales relativas al derecho a la información, no menoscabo de derechos laborales y autonomía personal	Ilustración de las características, condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales, lo que incluye dar a conocer la existencia de un régimen de transición y la eventual pérdida de beneficios pensionales
Deber de información, asesoría y buen consejo	Artículo 3.º, literal c) de la Ley 1328 de 2009 Decreto 2241 de 2010	Implica el análisis previo, calificado y global de los antecedentes del afiliado y los pormenores de los regímenes pensionales, a fin de que el asesor o promotor pueda emitir un consejo, sugerencia o recomendación al afiliado acerca de lo que más le conviene y, por tanto, lo que podría perjudicarle
Deber de información, asesoría, buen consejo y doble asesoría.	Ley 1748 de 2014 Artículo 3.º del Decreto 2071 de 2015 Circular Externa n.º 016 de 2016	Junto con lo anterior, lleva inmerso el derecho a obtener asesoría de los representantes de ambos regímenes pensionales.

Se exige entonces una índole de consentimiento tan específico por parte de un afiliado, que una mínima variación en el proceso de asesoría comporta la declaración de que hubo ausencia total de consentimiento y, por lo mismo, ineficacia por inexistencia del acto jurídico.

Pero, además, al invertirse la carga de la prueba, le basta a la actora afirmar que no obtuvo la información adecuada cuando transitó entre los regímenes, para que sea el fondo de pensiones el que deba desplegar la actividad probatoria necesaria para demostrar ese cabal acompañamiento. En tal sentido, se insiste, ni el paso del tiempo impide accionar contra un acto que no existió ni la oportuna re-asesoría, cuando ella se presenta, puede sanear lo que feneció al nacer.

Un párrafo de la pluricitada sentencia 68.838 de 2019 es elocuente:

De hecho, la regla jurisprudencial identificable en las sentencias CSJ SL 31989, 9 sep. 2008, CSJ SL 31314, 9 sep. 2008 y CSJ SL 33083, 22 nov. 2011, así como en las proferidas a la fecha CSJ SL12136-2014, CSJ SL19447-2017, CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018 y SL1452-2019, es que las administradoras de fondos de pensiones deben suministrar al afiliado información clara, cierta, comprensible y oportuna de las características, condiciones, beneficios, diferencias, riesgos y consecuencias del cambio de régimen pensional y, además, que en estos procesos opera una inversión de la carga de la prueba en favor del afiliado.

La mirada censora de la Corte sobre estos procedimientos de las AFP se ha ido ampliando, desde los afiliados que tenían el beneficio de transición o estaban próximos a pensionarse, hasta toda clase de afiliados. Este último fallo lo reafirma:

Lo anterior, se repite, sin importar si se tiene o no un derecho consolidado, se tiene o no un beneficio transicional, o si está próximo o no a pensionarse, dado que la violación del deber de información se predica frente a la validez del acto jurídico de traslado, considerado en sí mismo.

Así las cosas, tanto del recuento realizado como del interrogatorio absuelto por la demandante, se desprende, de un lado, que para la época del traslado inicial al RAIS, concretamente el 23 de agosto de 1994, cuando suscribió el formulario de vinculación a PORVENIR S.A. (fl 61 del archivo 003 del expediente digital), existía la normatividad ya citada que aludía a la existencia de un **deber de información**, y de otro lado, que escaso era el conocimiento que tenía la actora respecto del funcionamiento de ambos regímenes, estando el traslado en su momento motivado por la extinción del ISS, panorama bajo el cual, más que promocionarse el RAIS como una alternativa, era prácticamente una imposición ante el temor que fundaba tal aseveración, la falta de comprensión respecto de los riesgos y desventajas que ocasionaría el traslado de régimen pensional, y la escasa información brindada por el asesor de la AFP demandada, quien no realizó un examen claro, comprensible y veraz respecto de la esfera fáctica, jurídica y prestacional al momento del traslado de régimen pensional.

Y es que expresamente la señora **ADRIANA CÓRDOBA SÁNCHEZ** en el aludido interrogatorio expuso que su nivel académico era profesional, y laboraba como enfermera jefe. Respecto del traslado a PORVENIR S.A., indicó que el mismo se dio con ocasión a que en la empresa en donde laboraba para la data de afiliación (Fundación Santa Fe), mediante el área de Recursos Humanos simple y llanamente le indicó que debía trasladarse a la AFP, acto que se materializó mediante la entrega del formulario de afiliación para su respectiva rubrica, sin que se haya probado dentro del plenario la mediación de asesoría alguna por parte de la AFP a la demandada, aunado a esto resaltó que le indicaron que el fondo privado otorgaría un mayor beneficio, y posterior a ello, mediante citación grupal, se requirió a varios trabajadores con el fin de materializar el traslado de régimen pensional.

Resaltó la señora **CÓRDOBA SÁNCHEZ** que no existió asesoría, pues fue la parte de recursos humanos quien realizó el proceso de traslado, en donde el asesor del fondo privado, simplemente se limitó a recopilar los formularios de afiliación, sin que se otorgara la oportunidad de realizar preguntas. Finalmente destacó que pese a la falta de información al momento del traslado, la AFP accionada no la asesoró antes del cumplimiento de los 47 años de edad.

Destáquese que la deponente NO aceptó tener una formación en seguridad social de la que pudiese predicarse una comprensión del tema, máxime cuando ni siquiera se acreditó la existencia de una explicación completa por parte del asesor del fondo privado.

En todo caso, en gracia de discusión, lo cierto es que no se vislumbra una suficiente ilustración, ni siquiera en asuntos tan relevantes como aportes voluntarios, pese a la trascendencia de este aspecto en la obtención de una pensión en un monto mayor en contraste con la que percibiría del régimen de prima media, máxime si este es uno de los atractivos con los que más se publicita este sistema; tampoco se le habló de modalidades de pensión, la posibilidad de acceder a una garantía de pensión mínima, los requisitos para causar la prestación por vejez en uno y otro régimen, las principales diferencias de cada uno, lo atinente a la redención del bono pensional y ello sólo por mencionar algunos aspectos que debieron ser abordados en esa reunión inicial. Pero nada de ello se dijo, o por lo menos no se acreditó.

Tampoco existían las herramientas financieras o la tecnología para realizar algún tipo de cálculo, de ahí que esta Sala cuestione la dificultad para establecer, en aquella época, cuál régimen le era más favorable a una persona, pues realmente el monto de la pensión es uno de los aspectos que tiende a inclinar la balanza a la hora de la escogencia de un fondo, prestación en un principio depende de un capital mínimo exigido, punto que NO ERA clarificado en forma suficiente para efectos de que una persona entendiera que de NO alcanzar el ahorro necesario NO se pensionaría, o por lo menos que la prestación dependía del capital acumulado en toda la vida laboral, aunado a la incidencia de factores externos impredecibles a futuro (composición del grupo familiar, fluctuación de los IBC y variación del mercado, etc) haciéndole un estimativo de cuánto dinero se requería sólo para financiar un salario mínimo, panorama bajo el cual entendería la necesidad de planear su futuro pensional para acceder a una cuantía mayor, pero tal aspecto también se omitió, o por lo menos, se insiste, no se acreditó lo contrario.

Empero, lo antes expuesto no debe comportar un foco de distracción, pues era a la administradora del RAIS y no a la parte actora, a la que le correspondía probar, como se indicó, que con antelación al diligenciamiento del formulario de traslado mediaba un consentimiento informado, el que en el caso aquí analizado se echó de menos. Ello aunado a que ninguna confesión podría desprenderse de la versión dada por la accionante, pues se insiste, ni siquiera le explicaron las ventajas y desventajas de cada régimen.

Visto, así las cosas, acogiendo los postulados sentados por nuestro órgano de cierre, se **CONFIRMARÁ** la decisión en este punto.

De otro lado, ha de precisarse que la aludida ineficacia no sólo implica el retorno de los dineros que se encuentren en la cuenta de ahorro individual de la demandante, dígame aportes obligatorios, rendimientos, entre otros, sino que además acarrea a la administradora del RAIS PORVENIR S.A, a trasladar a COLPENSIONES E.I.C.E todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación, en los términos referidos por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia de radicación 31.989, providencia donde la Sala de Casación Laboral adujo que la administradora debía asumir con cargo a su propio patrimonio, los deterioros sufridos por el bien administrado, incluyendo los gastos de administración en que hubiere incurrido, concepto que abarca los costos de administración, primas de seguros de invalidez y sobrevivientes, además del porcentaje destinado al Fondo de Garantía de la Pensión Mínima de acuerdo a lo previsto en el art. 20 de la Ley 100 de 1993, punto en el que se **CONFIRMARÁ**, la decisión adoptada por la a quo, quien tras exponer sus razones, ordenó a PORVENIR S.A. a devolver los aportes de la demandante como son cotizaciones, gastos de administración, con todos sus frutos e intereses, las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes, en razón a la declaración de la ineficacia del traslado, esto es, con los rendimientos que se hubieren causado y el porcentaje correspondiente a la garantía de pensión mínima, también deberá trasladar la prima de reaseguro de FOGAFIN y los aportes al fondo de solidaridad pensional que se hubieren causando en el tiempo en que la actora estuvo afiliada a dicha administradora debidamente indexados y discriminados por la AFP con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, ingreso base de cotización, aportes y demás información importante que los justifique, de este modo, y en aras de garantizar la efectividad, alcance y ejecución de la presente providencia, considera necesario esta Magistratura, **ADICIONAR** a la orden anterior, la directriz de trasladar dichos conceptos dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la providencia, lo anterior conforme lo ha indicado de forma reiterada y pacífica la honorable Corte Suprema de Justicia, y así se dirá en la parte resolutive del fallo.

Y es que la Sala de Casación Laboral, de cara a los efectos de la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional, ha sido pacífica en que ello trae como consecuencia para el fondo de pensiones del régimen de ahorro individual con solidaridad, la devolución con cargo a sus propios recursos de los gastos de administración, razonamiento plasmado, entre otras, en la sentencia de radicación 85325 noviembre de 2020, cuando señaló que:

“(…) genera, como consecuencia, la de retrotraer la situación al estado en que se encontraba como si el acto nunca hubiera existido, es decir, se debe hacer la ficción de que el traslado nunca ocurrió, lo que conlleva, por parte de las administradoras privadas, a trasladar a COLPENSIONES, el capital ahorrado junto con los rendimientos financieros, con los gastos de administración y comisiones con cargo a sus utilidades (al efecto, pueden consultarse, entre otras, las sentencias de casación CSJ SL 31989, 9 sep. 2008, CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018, CSJ SL1421-2019 y CSJSL1688-2019)”

Y nuevamente en las sentencias de radicación 77.804 y 68.087 (M.P. Gerardo Botero Zuluaga) ambas de 2020, rememoró la CSJ SL, 8 sep. 2008, rad. 31989, en la que se dijo:

“Como la nulidad fue conducta indebida de la administradora ésta debe asumir a su cargo los deterioros sufridos por el bien administrado, esto es, las mermas sufridas en el capital destinado a la financiación de la pensión de vejez, ya por pago de mesadas pensionales en el sistema de ahorro individual, ora por los gastos de administración en que hubiere incurrido, los cuales serán asumidos por la Administradora a cargo de su propio patrimonio, siguiendo para el efecto las reglas del artículo 963 del C.C.

Tal pensamiento también fue reiterado en la sentencia 78.667 (M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo), cuando adujo que:

De modo que, a juicio de la Corte, si bien no se pueden desconocer las reglas para las *restituciones mutuas* contempladas en el artículo 1746 del Código Civil, lo trascendente en la declaratoria de ineficacia de un acto jurídico es el restablecimiento de la legalidad que impone la eliminación de los efectos del acto configurado contrario a derecho y permitir, cuando las circunstancias así lo posibiliten, retrotraer las cosas al estado en que estaban como si el negocio no se hubiere celebrado.

En el *sub lite*, la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho la demandante en el régimen de prima media con prestación definida. Ello, incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional

(...) De modo que, en este caso, la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional deben asumirla todas las entidades del régimen de ahorro individual a las que estuvo vinculado la actora, sin importar si tuvieron o no injerencia, o si participaron o no en el cambio de régimen pensional. Y aún en el evento de que Porvenir S.A. y Colfondos S.A. se consideren terceros, le asiste razón al actor en cuanto afirma en su oposición que, en dicha situación, es aplicable el artículo 1748 del Código Civil. En consecuencia, las AFP deben reintegrar los valores que recibieron a título de cuotas de administración y comisiones.

(...) Así, es claro que no le asiste razón al recurrente cuando refiere que «*las sumas depositadas en el fondo de garantía mínima no están en su poder*», debido a que el recaudo y manejo de las sumas destinadas al fondo de garantía mínima en el RAIS, en la actualidad, está a cargo de las administradoras de pensiones.

Y es que no puede verse afectada la sostenibilidad financiera del régimen de prima media con prestación definida, debiendo garantizarse que COLPENSIONES E.I.C.E. reciba una suma equivalente a la que hubiese generado con rendimientos financieros, en caso de que la demandante jamás se hubiese trasladado, y es claro que de acuerdo con la forma como se distribuyen las cotizaciones en el RAIS, parte de ellas se imputó a gastos de administración, compañías aseguradoras y el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, sumas que como se dijo no puede ser inferior al monto total del aporte legal correspondiente en caso de que la afiliada hubiere permanecido bajo la administración de COLPENSIONES E.I.C.E, máxime si la ineficacia conlleva devolver las cosas a su estado original, por lo que se considera resuelto lo planteado por COLPENSIONES en su recurso de alzada, sin necesidad de aclarar o adicionar la sentencia en este punto, pues esta Magistratura

considera que son claros los postulados jurisprudenciales que garantizan el principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional en los casos de ineficacia de la afiliación al RAIS, esto al tenor de lo dispuesto por el Acto Legislativo 01 de 2005.

Empero, ello NO quiere decir que los rendimientos causados estén llamados a engrosar las arcas de la administradora del RAIS, pues si bien corresponden a unas utilidades acumuladas por años, generadas por las diferentes inversiones realizadas por los fondos privados en cumplimiento de la eficiente gestión que les impuso la ley, lo cierto es que dichos rendimientos son uno de los ítems que conforman la cuenta de ahorro individual, que como su nombre lo dice, pertenece al afiliado y cuando este se traslada de régimen, los dineros depositados allí necesariamente pasaran al fondo común administrado por prima media.

Tal razonamiento también encuentra soporte en lo normado por el literal d) del art. 60 de la Ley 100 de 1993, según el cual el conjunto de las cuentas individuales de ahorro pensional constituye un patrimonio autónomo propiedad de los afiliados, denominado fondo de pensiones, el cual es independiente del patrimonio de la entidad administradora.

De otro lado, respecto a la indexación de los tres ítems que componen los costos de administración, esta Magistratura considera procedente **CONFIRMAR** el fallo toda vez que tal dinero (costos de administración, primas de seguros de invalidez y sobrevivientes, además del porcentaje destinado al Fondo de Garantía de la Pensión Mínima), debe ser entregado a Colpensiones E.C.I.C.E debidamente indexado por parte de Porvenir S.A., teniendo en cuenta como índice inicial el IPC certificado por el DANE a la fecha de pago de cada aporte y como índice final el vigente a la fecha de devolución aquí ordenada, aplicando la siguiente fórmula:  $\text{Indexación} = \frac{\text{índice final}}{\text{índice inicial}} \times \text{capital} - \text{capital}$ . Ello por cuanto una vez entre tal dinero al patrimonio de Colpensiones, el mismo se habrá visto envilecido por el paso del tiempo.

Ya la Sala de Casación Laboral se ha pronunciado sobre estos efectos, cuando indica que la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional trae como consecuencia para el fondo de pensiones del régimen de ahorro individual con solidaridad, la devolución con cargo a sus propios recursos de los gastos de administración debidamente indexados, posición que se puede consultar en las providencias SL4811-2020, SL3207-2020, SL1688-2019, SL3202-2021, SL3706, SL3707, SL3708, SL3710 y SL3349-2021.

También resulta necesario señalar que, conforme múltiples pronunciamientos de la Sala de Casación Laboral, consúltense las sentencias de radicación SL4803-2021 y SL3710-2021<sup>1</sup>, al momento de cumplirse la orden impartida, Porvenir S.A. deberá discriminar los conceptos entregados a Colpensiones E.I.C.E, detallando en forma pormenorizada a que corresponden cada uno de los valores entregados, punto en el que también se **CONFIRMARÁ** el fallo de primera instancia.

En cuanto a la inconformidad de Porvenir S.A, atinente a la imposibilidad de retornar las cuotas de administración en tanto a su juicio había operado el fenómeno jurídico de la PRESCRIPCIÓN, habrá de señalarse que ya la Corte se ocupó del tema cuando mediante sentencia de radicación SL2946-2021 emitida el 16 de junio, la M.P. CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO, reitero que la acción de ineficacia del traslado entre regímenes pensionales así como los derechos que de ella emanen son imprescriptibles, es decir pueden reclamarse en cualquier tiempo. Aunado a ello, en este tipo de procesos no se trata solo de reversar el acto de traslado, sino todas las operaciones, actos y contratos con el afiliado, aseguradoras y administradoras.

En sentencia SL1942-2021 adujo que:

Por último, cumple acotar que no prospera la excepción de prescripción propuesta por las demandadas, como acertadamente lo dispuso el *a quo*, porque los afiliados al Sistema General de Pensiones pueden solicitar que se declare la ineficacia del traslado entre regímenes pensionales *en cualquier tiempo*, para que, por esa vía se reconozca a cuál de tales regímenes (RPMPD o RAIS) se encuentran afiliados.

En definitiva, la mentada declaratoria de ineficacia es imprescriptible, en tanto se trata de una pretensión meramente declarativa y por cuanto los derechos que nacen de aquella tienen igual connotación, pues forman parte del derecho irrenunciable a la seguridad social.

Y luego en la SL2208-2021 señaló:

En cuanto a la excepción de prescripción que propusieron las demandadas, debe precisarse que esta Sala ha sostenido reiteradamente que la acción de ineficacia del traslado entre regímenes pensionales es imprescriptible. En efecto, ha afirmado que, a diferencia de los derechos de crédito y obligaciones, los hechos o estados jurídicos no están sujetos a prescripción. Por ello, puede solicitarse en cualquier tiempo la declaratoria de ineficacia del acto de afiliación, en la medida que esta declaración tiene como objetivo comprobar o constatar un estado de cosas -carencia de efectos jurídicos del acto desde su nacimiento-surgido con anterioridad al inicio de la litis (CSJ SL1688-2019, reiterada en CSJ SL4360-2019).

En tal contexto, no sería dable acoger los razonamientos de la AFP accionada en este punto, máxime cuando no podría desligarse la ineficacia de sus efectos, aduciendo que los derechos derivados de ella no prescriben (retornar a prima media), pero sus consecuencias sí (montos a devolver).

---

<sup>1</sup> Concretamente dispusieron que: *Al momento de cumplirse esta orden, los conceptos deberán aparecer discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen.*



Finalmente, en cuanto a la condena en costas que en primera instancia que se impuso a COLPENSIONES E.I.C.E, resulta pertinente indicar que al tenor de lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 365 del Código General de Proceso, inicialmente para su concesión se acudió a un criterio objetivo, dado que sólo se examinaba si había salido avante la totalidad o no de las pretensiones, sin atender la buena o mala fe de la entidad. Sin embargo, tal posición fue morigerando en casos en los que no había sido la conducta de la entidad la que originó el conflicto que hoy se pone en conocimiento de esta Sala, máxime cuando la postura proviene de la aplicación minuciosa de la ley, sin los alcances que en un momento ha dado la jurisprudencia en su función de interpretar las normas.

De ahí que cualquier decisión de Colpensiones E.I.C.E tendiente a negar administrativamente el traslado que judicialmente solicitó la accionante, no resulte caprichosa, sino que proviene de la prohibición consagrada en la Ley 797 de 2003 en torno a la imposibilidad de trasladarse entre régimen cuando un afiliado se encuentra a menos de 10 años para alcanzar la edad para pensionarse.

Tal criterio se adoptó con ocasión de la expedición de la sentencia con radicado 44.454 del 2 de octubre de 2013, debate que se dio desde la óptica de la improcedencia de los intereses moratorios en aquellos eventos en que las actuaciones de las administradoras de pensiones al no reconocer o pagar las prestaciones periódicas a su cargo dentro de los plazos estipulados, se encontraran justificadas.

*Mutatis mutandis*, se ha aplicado dicho criterio PERO UNICAMENTE respecto de las costas procesales que se tasan en primera instancia a cargo de Colpensiones E.I.C.E, no así respecto de las administradoras del RAIS accionadas, pues lo que en este aspecto se analiza no es precisamente la negativa de la respuesta a un derecho de petición, sino los efectos de una afiliación a otro régimen, es el actuar u omisión de aquellas en el que cimenta la necesidad de un afiliado de activar el aparato judicial en aras de obtener la declaratoria de ineficacia de un acto jurídico, habiendo salido avante las pretensiones que en tal sentido se incoaron, razones que aunadas a las que preceden impiden a esta Magistratura imponer condena en costas a Colpensiones, razón por las que se **REVOCARÁN** las tasadas a su cargo en primera instancia.

En consecuencia, la decisión adoptada en primera instancia será **CONFIRMADA** por encontrarla ajustada a los antecedentes normativos y jurisprudenciales que se han expedido en torno al tema, **adicionándola** en los aspectos antes aludidos.

Se condenará en costas en esta instancia a PORVENIR S.A. a favor de la demandante por no haber tenido éxito en el recurso apelación impetrado. Se fijarán como agencias en derecho la suma de

\$1.160.000. Dicha condena NO se extenderá a Colpensiones E.I.C.E dado que fueron acogidos en esta instancia algunos de los planteamientos esbozados en el recurso de alzada.

## 5 DECISIÓN DEL TRIBUNAL

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, **DECIDE**

**PRIMERO: CONFIRMAR** la sentencia proferida el 12 de agosto de 2022 por el Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral instaurado por la señora **ADRIANA CÓRDOBA SÁNCHEZ** identificada con la cédula de ciudadanía Nro. 51.724.505, en contra de **PORVENIR S.A. y COLPENSIONES E.I.C.E.**

**SEGUNDO: ADICIONAR** el numeral segundo de la providencia, bajo el entendido que la orden de traslado de valores provenientes del RAIS con destino al RPM, se debe ejecutar dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la providencia.

**TERCERO:** Costas en esta instancia a cargo de PORVENIR S.A. Se fija como agencias en derecho la suma de \$1.160.000 a favor de la demandante. Se **REVOCA** las tasadas en primera instancia a cargo de Colpensiones E.I.C.E.

Lo anterior se notificará por **EDICTO** que se fijará por la Secretaría por el término de un día.

Los Magistrados  
(Firmas escaneadas)

  
ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA

  
MARIA NANCY GARCÍA GARCÍA

  
MARTHA TERESA FLOREZ SAMUDIO

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  
SALA LABORAL



**SECRETARÍA**

**EDICTO**

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

**HACE SABER:**

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Proceso:	ORDINARIO LABORAL- apelación.
Demandante:	<b>ADRIANA CORDOBA SANCHEZ.</b>
Demandado:	<b>COLPENSIONES E.I.C.E. y PORVENIR S.A.</b>
Radicado No.:	05001-31-05-011-2020-00116-01.
Tema:	ineficacia traslado.
Decisión:	<b>MODIFICA SENTENCIA.</b>
Fecha de la sentencia:	<b>26/5/2023.</b>

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/148> por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibidem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 29/05/2023 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.



**RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS**  
Secretario